

DOCUMENTO

EL PENSAMIENTO SOCIAL EN LA PRIMERA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO*

Jaime Guzmán E.

Al cumplirse un año del fallecimiento de Jaime Guzmán Errázuriz, destacado hombre público y senador de la república, el trabajo que se reproduce en esta edición viene a agregarse a la antología titulada "'El miedo' y otros escritos: El pensamiento de Jaime Guzmán E.", realizada por Arturo Fontaine Talavera y publicada en *Estudios Públicos* N° 42 (otoño 1991).

El siguiente estudio describe el ambiente ideológico-político de Chile hacia 1904, con especial detención en la posición del Partido Conservador, sustentado firmemente en la doctrina católica. Jaime Guzmán E. desmiente aquí la aseveración de que los conservadores chilenos no acogieron la encíclica *Rerum novarum*, afirmando que ésta fue ampliamente conocida en nuestro país y que la doctrina social de la Iglesia fue incorporada formalmente en su declaración de principios.

Posteriormente se efectúa un análisis histórico de la Ley de Accidentes del Trabajo, promulgada en 1916, pero cuyo proyecto original data de 1904. A juicio de Guzmán, en el debate de la Ley hay dos visiones antagónicas: una tenía como trasfondo la lucha de clases; la otra se centraba en la virtud de la justicia en un orden jurídico de armonía social. Finalmente, Guzmán examina las doctri-

* Texto del estudio "Ideología política de la legislación social chilena. Ley N° 3.170 de Accidentes del Trabajo del 30 de diciembre de 1916", realizado por Jaime Guzmán Errázuriz, en 1966, en calidad de alumno del Seminario de Historia del Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile.

nas jurídicas envueltas en materia de responsabilidad por accidentes laborales, señalando que si bien ya se había considerado la posibilidad de establecer un sistema de seguro, no se estimó oportuno hacerlo, atendido el grado de desarrollo que presentaba el país en ese momento.

IDEOLOGÍA POLÍTICA DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL CHILENA

Ley N° 3.170 de Accidentes del Trabajo del 30 de diciembre de 1916

I. AMBIENTE IDEOLÓGICO POLÍTICO HACIA 1904

Durante toda la segunda mitad del siglo pasado, la mayor preocupación doctrinaria de la vida pública chilena estuvo absorbida por dos problemas fundamentales: el de las llamadas "cuestiones teológicas" y el de la libertad electoral.

Fue la defensa de los principios católicos y de los privilegios de la Iglesia lo que provocó, a mediados del siglo pasado, la constitución del Partido Conservador en su forma definitiva. Ello trajo como consecuencia que en torno a él se constituyera un estilo de actuación política posible de ser resumido en el lema: "actuar como católico y defender a la Iglesia en la vida pública".

Poco después, la creciente intervención electoral del Ejecutivo en las elecciones presidenciales y parlamentarias privó al Partido Conservador de una representación en el Congreso, que correspondiera a su real potencial electoral, durante gran parte de los veinte años de gobiernos liberales. La vieja costumbre imperante, además de una decisiva participación presidencial en la designación de su sucesor, agravó las cosas en este aspecto, problema que vino a culminar a fines del gobierno de Balmaceda y que fue, a la postre, una de las causas próximas de la revolución de 1891.

Todo esto trajo consigo que el Partido Conservador, representante oficial de los políticos católicos durante el siglo pasado, centrara sobre las dos cuestiones ya enunciadas su mayor interés y dedicación. El "problema social", en su denominación moderna más corriente no se le planteó, por entonces, con una entidad propia definida.

En la Convención de 1884, su presidente, don Rafael Larraín Moxó, sintetizaba la posición conservadora, en forma suficientemente autorizada, diciendo: "Para sostener esos principios estamos aquí reunidos, para luchar

por ellos, por la fe y las verdades del catolicismo, por la tranquilidad de nuestras familias y por que algún día llegue a ser verdad el sufragio libre y se manifieste la opinión pública, lucharemos contra la intervención oficial en las próximas elecciones de Presidente de la República".

Como contrapartida, los grupos liberales de la época fueron más bien "laicistas" que "sociales". Girando en torno a los mismos problemas nacionales, fueron los grandes adversarios de los conservadores en toda la cuestión religioso-política.

De consiguiente, hasta comienzos de este siglo, las obras sociales estuvieron, básicamente, a cargo de particulares o de instituciones como la Iglesia. Bástenos mencionar, al respecto, el Instituto de Caridad Evangélica (1844), las Conferencias de San Vicente de Paul (1854) y la Asociación Católica de Obreros, fundada en 1878 a instancias de don Abdón Cifuentes y de don Domingo Fernández Concha, para advertir la realidad de la labor social particular, realizada preferentemente por católicos.¹

Aparición de la "cuestión social" en Chile

Dos hechos de decisiva importancia, a fines del siglo pasado, dieron forma, ahora ya con una entidad propia, a la "cuestión social".

Por una parte, en 1891, el Papa León XIII publicó su célebre encíclica *Rerum novarum* ("De las cosas nuevas"), en que aborda medularmente la cuestión obrera a la luz de los principios cristianos. El texto pontificio condena todos los fundamentos del socialismo y del liberalismo económico. Es así como reafirma el carácter natural del derecho de propiedad privada, a la vez que rechaza la lucha de clases, la aplicación de la ley de la oferta y de la demanda al trabajo humano, y el olvido de los deberes que la caridad impone hacia los más necesitados. Todo ello, claro está, basado en el principio cristiano de la igualdad esencial de todos los hombres, y referido a su perfección espiritual tendiente al fin último de la salvación de las almas.

Contrariamente a lo que muchas veces se ha afirmado, el texto fue ampliamente conocido en Chile y produjo hondo impacto en muchos de los católicos dedicados a los estudios y a la acción política. En efecto, el 18 de septiembre de 1891, el Arzobispo de Santiago, Monseñor Mariano Casanova,

¹ Fernando Silva Vargas, "Notas sobre el pensamiento social católico a fines del siglo XIX", *Historia*, N° 4 (1965), pp. 243-245.

dio a conocer un amplio y detallado comentario de la encíclica, encareciendo su profusa divulgación, especialmente entre los sectores más modestos de la población católica.²

Por otra parte, en noviembre de 1887, un grupo disidente del Partido Radical, con Malaquías Concha a la cabeza, fundó el Partido Demócrata. En su primera exposición programática se declaraba laico y sostenía ideas socialistas, principalmente en materia educacional y económica. Como síntesis de su programa, afirmaba tener por objeto "la emancipación política, social y económica del pueblo" (Artículo 1º de la Declaración).

El advenimiento al cuadro político del Partido Demócrata tuvo una importante repercusión en cuanto al desarrollo de los problemas sociales. Puede estimarse como la primera expresión de la lucha de clases, aunque en forma incipiente, como escuela de acción política.

Situadas las cosas en este punto, el año 1901 tuvo lugar una de las más importantes convenciones del Partido Conservador. Al inaugurarla, el presidente del partido, don Carlos Walker Martínez, sostuvo con energía y brío la base de sustentación del partido en los principios cristianos; afirmó textualmente:

El Evangelio encierra la armonía eterna de las leyes sobrenaturales que señalan el camino de la felicidad humana. Despierta y estimula la generosidad del poderoso; da resignación al pobre con el consuelo de una vida mejor que ésta, y tanto a unos como a otros, sin distinción de nombre y fortuna, les dice que son iguales y libres todos, y todos hijos de Dios.

Libertad para todos, amor entre los de abajo y los de arriba; ni opresores ni oprimidos, culto por todo lo santo y lo noble.

Honradez y trabajo; virtud y aliento; fraternidad sincera...

He ahí, señores, el Orden Social Cristiano, tal como nosotros lo sostenemos, conforme a las sublimes enseñanzas del Gran Pontífice que hoy rige los destinos de la Iglesia.

Resulta interesante hacer notar la expresa referencia del presidente del Partido Conservador a las enseñanzas de León XIII, como un nuevo desmentido categórico a la especie de que las clases dirigentes chilenas habrían procurado esconder sistemáticamente la encíclica *Rerum novarum*.

² Ibídem, p. 248.

Consecuente con las expresiones del señor Walker Martínez, la Convención conservadora acordó incluir en los estatutos del partido la Declaración Fundamental de adhesión a la doctrina social-cristiana, que comenzaba afirmando:

La suprema aspiración del Partido Conservador es el mantenimiento y desarrollo del Orden Social Cristiano.

Cabe hacer presente que el socialcristianismo del Partido Conservador estuvo íntimamente ligado, tal como a continuación lo aclara expresamente la Declaración Fundamental, al carácter católico confesional del partido. Este hecho es de enorme importancia, desde el punto de vista formal, porque teniendo en cuenta que la acción se especifica por la intención, es profundamente diferente el socialcristianismo de quien lo acepta en virtud de que emana de enseñanzas pontificias a las que debe acatamiento, del que lo hace por un mero acuerdo libre y voluntario con su contenido parcial o hasta un momento determinado.

Al iniciarse, pues, el siglo XX, se encuentran enfrentadas diversas tendencias en torno al mejoramiento de la clase obrera, las que en determinadas ocasiones se unirán frente a proyectos de ley concretos.

II. RESEÑA DE LA HISTORIA DE LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO DEL AÑO 1916

Después de situar someramente el ambiente ideológico-político en que entró a discutirse el proyecto de ley de indemnización para los accidentes del trabajo y antes de entrar a una exposición de su aspecto doctrinario, es menester reseñar, aunque sea a grandes rasgos, la larga historia de la que sería la ley 3.170, del año 1916.

Pocas leyes presentan un desarrollo más prolongado y lleno de alternativas. En efecto, el 2 de noviembre de 1904, el diputado conservador por Rancagua, don Alejandro Huneeus, presentó un primer proyecto sobre la materia; cerca de tres años después, el 7 de agosto de 1907, la Comisión recomendó a sus miembros, a insinuación de la propia Cámara de Diputados, el pronto despacho del informe.³

³ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados) (1907).*

Dos días después, el 9 de agosto de ese mismo año, el diputado señor Bonifacio Veas hizo llegar a la corporación una moción que comprendía un proyecto general sobre la legislación del trabajo. Esta moción, cuyo objeto de preocupación era más amplio, abordaba, entre otros, el punto de los accidentes del trabajo, propiciando soluciones algo divergentes de las planteadas por el proyecto Huneeus, como más adelante tendremos ocasión de analizar.

La extraordinaria lentitud del funcionamiento legislativo de la época hizo que pasaran más de dos años sin que la Comisión emitiera ningún pronunciamiento respecto de los dos proyectos mencionados.

Fue así como el 14 de octubre de 1909 el diputado por Bulnes, don Alfredo Barros Errázuriz, presentó un tercer proyecto, que fue el que en definitiva recogió la Comisión como guía fundamental, por considerar que era el que jurídicamente estaba mejor elaborado y porque consideraba "que contenía las ideas que con menos dificultad podrían encontrar acogida en las diversas corrientes de opinión".⁴

Entre los años 1910 y 1912, el tema de los accidentes del trabajo deja de ser un problema de significación restringida para grupos selectos; el mismo hecho de que en Argentina se estuviera discutiendo un proyecto presidencial en que se responsabilizaba al patrón de *todo* accidente del trabajo, contribuyó a crear en torno al proyecto una efervescencia algo mayor que durante la primera década del siglo, en que más bien parecía una cuestión de interés particular que nacional. Prueba de lo que afirmamos es la intervención del diputado demócrata señor Araya -sobre la que volveremos más adelante- en que traía a colación el proyecto argentino,⁵ como asimismo la solicitud del pronto despacho del proyecto, hecha por el Centro Liberal el 16 de julio de 1912.

De ahí para adelante, creció ostensiblemente la intensidad de la atención parlamentaria hacia el proyecto. La Comisión de Legislación Social, a la cual la Cámara de Diputados había estimado también oportuno pedirle su pronunciamiento, dio a conocer un detallado informe,⁶ que dejó el proyecto en situación de ser tratado directamente por la Corporación en pleno.

⁴ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1909).

⁵ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1910), sesión Nº 48, p. 1.501.

⁶ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1912), sesión Nº 36, p. 1.121.

Sin embargo, antes de que ello ocurriera, el ya largo y complicado desarrollo de los varios proyectos presentados se vio aumentado por la presentación de una moción por parte del diputado don Alejo Lira, el 27 de agosto de 1912. Esta moción⁷ está calificada por la historia de la ley como un "contra-proyecto" al del señor Barros Errázuriz, el que, como ya hemos dicho, constituía la base de acción para la Comisión.

No obstante el apoyo recibido por el señor Lira, de parte del prestigioso dirigente demócrata don Malaquías Concha y de algunos otros diputados, prevaleció finalmente la concepción doctrinal de don Alfredo Barros.

Fue así como el 17 de enero de 1914, en una breve sesión, la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto, tal como lo había entregado la Comisión de Legislación Social. A petición del diputado señor Quezada, la Corporación lo despachó rápidamente. La solicitud de unanimidad del diputado por Santiago fue recogida por el Gobierno y por los diversos sectores políticos. Tanto el Ministro señor Villegas como los diputados señores Francisco Huneeus por los conservadores; Osear Urzúa por los liberales demócratas; Malaquías Concha por los demócratas, y el señor Espinoza Jara por los nacionales, manifestaron, en breves palabras, su satisfacción por la aprobación del proyecto, como un importante paso de la legislación social chilena.⁸

Al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados fue ampliamente debatido en el Senado. En la discusión tuvieron destacada participación numerosos senadores, sobresaliendo dos grandes juristas: don Luis Claro Solar y don Alfredo Barros Errázuriz, quien en ese momento era representante de su partido en la Cámara Alta.

Al enfocar la parte de controversia jurídica que marcó la discusión en ambas Cámaras, haremos referencia a las principales innovaciones que el Senado le hizo al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

Posteriormente, una vez aprobado el proyecto en general por el Senado, la Cámara Baja invitó a la formación de una Comisión Mixta que analizara en conjunto las divergencias, antes de enviárselo para su promulgación al Presidente de la República.

El Senado aceptó la invitación y se constituyó la Comisión con los más destacados parlamentarios en la materia. Formaron parte de ella los diputados señores Malaquías Concha, Ignacio Escobar, Jorge Errázuriz

⁷ *Ibidem*, sesión N° 53, p. 1.628.

⁸ *Sesiones (extraordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1913-1914), sesión N° 73, p. 2.511.

Tagle, Alejo Lira Infante, Fidel Muñoz Rodríguez y Enrique Rodríguez; y los señores senadores Carlos Aldunate, Daniel Feliú, Angel Guarello, Pedro Montenegro, Alfredo Barros y Antonio Varas.

Después de algunas modificaciones sin mayor importancia, el proyecto fue definitivamente despachado por el Congreso. El Ejecutivo lo promulgó como ley de la República, y como ley 3.170 fue publicado en el Diario Oficial número 11.661 del 30 de diciembre de 1916.

III. DIVERSAS POSICIONES IDEOLÓGICAS MANIFESTADAS DURANTE EL DEBATE

En primer lugar abordaremos las diversas posiciones ideológicas surgidas durante el debate, para referirnos en seguida a las principales controversias jurídicas que se suscitaron en el campo doctrinario.

Para analizar la ideología que inspiró los proyectos a los cuales hemos hecho referencia en la historia de la ley, debemos formular una aclaración conceptual previa de capital importancia:

Si bien es cierto que muchas veces las divergencias que surgieron parecen más bien de detalles jurídicos o técnicos, no lo es menos que la fundamentación que para los diversos autores de las mociones respectivas tenía el proyecto, refleja hondas diferencias. Dicho en otros términos, aunque materialmente pudieran coincidir, formalmente existían concepciones abiertamente contrapuestas.

Desde luego, a nuestro modo de ver, cabe una distinción primera y elemental entre dos visiones nítidamente perceptibles, sea en los textos de las mociones, sea en el desarrollo del debate. Por una parte una visión clasista de la legislación social que tenía como trasfondo ideológico la lucha de clases preconizada por las doctrinas socialistas. Por la otra, una visión centrada en la virtud cardinal de la justicia, enmarcada en un orden jurídico de armonía social.

En efecto, las intervenciones de los diputados demócratas estuvieron siempre salpicadas de frases de "sensibilidad social". Más que referencias a conceptos de equidad, su lema era el de conseguir "lo más posible" para el obrero. No entramos aquí -no sería del ámbito de este trabajo- en un juicio sobre si sus exigencias excedían o no los marcos de la justicia. Nos remitimos, simplemente, a constatar el hecho de que fue la defensa incondicional del obrero, y no la búsqueda del equilibrio de la justicia, el móvil explícito de su actuación. Comprobaciones de lo expresado son la

fundamentación de su proyecto por el señor Bonifacio Veas⁹ como en la referencia al proyecto argentino hecha por el señor Araya, quien lo atribuye a las influencias de los parlamentarios socialistas.¹⁰

También hay que remarcar la existencia de una visión clasista de cerrada negativa a cualquier beneficio para la clase obrera. Pero la verdad es que a lo largo de toda la historia de la ley, esta posición sólo está reflejada por una intervención del senador Urrejola, quien, al pedirle a don Luis Claro Solar la fundamentación del proyecto, le hace ver que, a su juicio, la legislación vigente garantiza plenamente los derechos de los obreros.

Mayor interés ofrece el análisis de la otra posición, representada fundamentalmente por los conservadores y otros diputados afines.

Sin embargo, dentro de esta posición cabe una distinción entre la visión de don Alfredo Barros Errázuriz por un lado, y la de don Francisco Huneeus y don Foster Recabarren por el otro.

Es cierto que ambas tienen la justicia como eje de su estructura. Pero el señor Barros no la remonta explícitamente a principios cristianos, sino que argumenta únicamente en un terreno jurídico positivo, basado en un buen sentido y en un realismo histórico y nacional. La moción en cuestión comenzaba expresando lo siguiente:

Hace tiempo que viene sintiéndose en nuestro país la falta de una ley adecuada para prevenir estos accidentes y para establecer la responsabilidad consiguiente en el caso de que ellos ocurran; pero hasta la fecha no se ha conseguido un pronunciamiento del Congreso Nacional (...) se han dictado ya en nuestro país muchas leyes de protección a la clase obrera; pero no habiéndose dictado todavía la que venga a remediar esta necesidad, he creído hacer obra patriótica contribuyendo a su estudio con la presentación de este proyecto que venga a servir de complemento a los ya presentados por los honorables colegas don Alejandro Huneeus y don Bonifacio Veas.¹¹

⁹ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1907), sesión Nº 41, p. 1.128.

¹⁰ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1910), sesión Nº 48, p. 1.501.

¹¹ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1909-1910), sesión Nº 1, p. 20.

Lo anterior no debe ser entendido como una suposición de que el señor Barros Errázuriz estaba ajeno a los planteamientos cristianos; la afirmación precedente sobre el particular se limita a establecer una distinción con quienes hicieron de los principios cristianos el fundamento explícito de su interés por el despacho del proyecto. De este modo, argumentando en filosofía del Derecho, el señor Barros fundamenta el rol social del trabajo señalando que el objeto del contrato de trabajo -que es el ejercicio de la actividad humana- es inseparable de la calidad de persona moral del sujeto de ese mismo contrato, que es el propio obrero.

El diputado conservador don Francisco Huneeus comenzaba su moción de 1904, señalando:

Obra útil, patriótica y cristiana sería la de dictar una legislación general del trabajo (...).¹²

Hay aquí una expresa referencia al cristianismo como motor espiritual de una adecuada protección a los sectores más necesitados de la población. Más tarde, durante el desarrollo del debate, el señor Foster Recabarren sostenía, en interrupción concedida por don Alejo Lira, lo siguiente:

Este proyecto está inspirado en caridad. Si todos tuviéramos caridad, no necesitaríamos de esta ley. Si entendiéramos bien el catecismo de la doctrina cristiana, no habría necesidad de dictar leyes de esta especie. Las doctrinas del cristianismo están olvidadas y hay que reemplazarlas por estas leyes.¹³

La intervención recién transcrita merece un comentario algo más detenido. A nuestro juicio no está en la razón el señor Foster Recabarren al creer que es el olvido de las doctrinas cristianas lo que ha hecho necesarias las legislaciones sociales, y por qué no extenderlo, las legislaciones penales. Es la naturaleza caída por el pecado original y la necesidad de sanciones temporales para preservar la sociedad lo que constituye la necesidad de una legislación positiva. Así lo enseñan todos los Doctores de la Iglesia, empezando por Santo Tomás.

¹² *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1904-1905), sesión N° 2, p. 41.

¹³ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1912), sesión N° 53, p. 1.628.

Por otra parte, la afirmación de que el proyecto está inspirado en la caridad es admisible si se entiende en el sentido de que la virtud teologal de la caridad comprende la virtud cardinal de la justicia; pero el objeto propio del derecho es la justicia y no la caridad. Que no se puede faltar a la justicia sin violar la caridad, ello es evidente; pero, en cambio, se puede faltar a la caridad sin violar la justicia, y, en este caso, el sujeto no es susceptible de recriminación jurídica.

Pese a estas salvedades doctrinales que, a nuestro modo de ver, precisa la intervención del señor Foster Recabarren, no puede negarse que ella constituye una expresión de fe en la vigencia de los principios cristianos como los supremos ordenadores sociales.

Resumiendo lo expresado hasta aquí, podemos concluir que el objeto próximo que ideológicamente movió a los legisladores a impulsar esta ley fue el mejoramiento de la clase obrera. Pero mientras para unos lo fue desde un punto de vista de lucha clasista, para otros lo fue como una respuesta a un imperativo de justicia remontado -a veces expresamente- al cristianismo.

No deja de ser interesante hacer notar que no se observa a lo largo del debate una eventual "presión popular" que obligara a actuar a los legisladores. Cuando más, se recurre a la diaria visión de tantos desvalidos por accidentes del trabajo, como un llamado a la conciencia de cada cual sobre la urgencia de una legislación sobre la materia. Pero ni de la prensa de la época ni de la demora que -no obstante las muchas preferencias que experimentó el proyecto durante su historia-¹⁴ sufrió el proyecto hasta su aprobación definitiva, puede deducirse una presión externa de importancia.

IV. DOCTRINAS JURÍDICAS CONTROVERTIDAS EN LOS PROYECTOS

Sin considerar los aspectos técnicos de una ley de esta naturaleza, hay una serie de asuntos de considerable interés doctrinario, desde un punto de vista netamente jurídico.

A nuestro juicio, el de mayor relevancia es el de la determinación de los casos en que el patrón debe indemnizar al obrero que se inutiliza total o parcialmente, permanente o transitoriamente, a causa de un accidente del trabajo.

¹⁴ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1910), p. 1.500.

El otro aspecto que también esbozaremos es el de los diversos sistemas para tender a asegurar el cumplimiento por parte del patrón de su obligación correspondiente de indemnizar, en los casos en que -sea cual fuere la solución que se le dé al primer problema- la ley lo obligue a ello.

a) Extensión de la obligación del patrón

Durante la mayor parte del siglo pasado, toda esta materia estuvo regida por las reglas del Derecho Civil acerca de la responsabilidad extracontractual. Debía el obrero probar que el accidente se produjo por dolo o culpa del patrón, para hacerse acreedor a una indemnización.

Las enormes dificultades de que ello ocurriera con frecuencia en la práctica, movió a algunos tratadistas a considerar como indispensable la inversión del *onus probandi*. Diversas legislaciones europeas -entre otras la francesa- recogieron esta innovación a fines del siglo pasado.

En 1883, el prestigioso jurista y profesor francés residente en Bruselas, Sainctelette, enunció una nueva teoría, que más tarde sería conocida en todo el mundo como la "teoría del riesgo profesional". Básicamente, ella extiende la obligación del patrón respecto de la indemnización, a todos los accidentes que se produzcan a causa o con ocasión del trabajo, con algunas excepciones más o menos amplias. (Para algunos la culpa grave y el dolo del obrero, para otros sólo el dolo, para unos terceros toda fuerza mayor extraña al trabajo, etc.).

Fue esta teoría la que, sin perjuicio de una mayor o menor extensión, inspiró los proyectos de los señores Huneeus, Veas y Barros Errázuriz. Una clara y amplia fundamentación la encontramos en la moción del señor Barros Errázuriz.

Comienza criticando la aplicación de las normas de los cuasidelitos, propias del Derecho Civil en esta materia. Para ello, da un argumento inicial bastante discutible. En efecto, afirma que aquéllas rigen la responsabilidad extracontractual, mientras que en este caso la verdad es que existe un contrato. Decimos que como argumento este resulta bastante discutible, porque la responsabilidad contractual, como tal, no es la que se deriva entre dos personas ligadas por un contrato, sino la que surge del incumplimiento oportuno de este contrato. La responsabilidad de un mandatario que rompe el vidrio del automóvil de su mandante es extracontractual, aunque exista entre ellos un contrato, en este caso el mandato. Se trata, pues, de que para que el argumento precedentemente enunciado tenga real

vigencia habría que probar la positiva relación entre el contrato y el hecho del cual emana la responsabilidad.

Más convincentes nos parecen los otros argumentos de la moción a la cual nos estamos refiriendo.¹⁵ En primer lugar, el señor Barros trae a colación recientes y acabadas estadísticas alemanas que señalan que el 68% de los accidentes del trabajo se debe al "riesgo profesional". Sólo un 32% corresponde a culpa del obrero o del patrón. Ello trae consigo que la no aceptación de esta teoría dejaría necesariamente al margen de toda posible indemnización a la gran mayoría de los accidentes del trabajo.

Por otra parte, la equidad natural exige, según el criterio del señor Barros Errázuriz, que sea el patrón quien responda de los accidentes que con ocasión de su industria se originen, porque es él quien percibe los mayores beneficios de ella. En esta misma línea anota el siguiente raciocinio: si el patrón responde de los perjuicios que con su industria cause a terceros, *a fortiori* debe responder de aquellos que cause a sus operarios.

Más que nada, todas estas lucubraciones jurídicas representan el esfuerzo por encontrar una ficción legal que canalice adecuadamente exigencias de justicia y de humanidad.

Como consecuencia de lo dicho, el señor Barros propiciaba un artículo primero, concebido en los términos que a continuación se indican:

El patrón es responsable civilmente de todos los accidentes ocurridos a sus operarios, con motivo y en ejercicio de la profesión o trabajo que realicen; y queda obligado al pago de indemnización que esta ley establece, las cuales se deben de pleno derecho desde el instante mismo del accidente, sin que sea menester probar la culpa del patrón.

Se exceptúan de las disposiciones anteriores los casos en que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña y sin relación alguna al trabajo, o que el hecho se haya producido por culpa o negligencia grave del obrero, o que provenga de un delito imputable a un extraño.

En estos casos de excepción corresponde al patrón la prueba de las circunstancias que lo eximen de responsabilidad.¹⁶

¹⁵ *Sesiones (extraordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1909-1910), sesión N° 1, p. 20.

¹⁶ *Ibídem.*

Sobre esta misma materia, la moción Huneeus sugería la siguiente disposición más genérica que la anterior:

Se presume la responsabilidad del patrón en los accidentes del trabajo para el efecto de indemnización que establece esta ley, salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor.¹⁷

Puede apreciarse que la disposición recién transcrita está más cerca de una simple inversión del *onus probandi* que de una aplicación amplia de la teoría del riesgo profesional. Por otra parte, aquí el concepto de fuerza mayor es mucho más extendido que en la moción anterior, ya que ésta exigía una total independencia entre el acontecimiento que se califica como "de fuerza mayor" y el trabajo que realiza el obrero, requisito que está ausente de la moción del señor Huneeus.

Lo que hay en el fondo del problema es que la teoría del riesgo profesional supone una modificación, para estos efectos, del concepto civilista tradicional de "caso fortuito". No es ya el imprevisto a que no es posible resistir; más bien podría enunciarse, en términos vulgares, como aquello que comprendiendo el requisito común de todo caso fortuito, habría ocurrido igual, aunque no existiera ese determinado contrato de trabajo en esa determinada industria.

Por último, resulta interesante hacer mención de lo que de manera idéntica proponía el señor Bonifacio Veas. En efecto, en los artículos 16 y 19 de su proyecto general de legislación social, expresaba lo que sigue:

Los patrones son responsables de los accidentes sobrevenidos al obrero en el trabajo (...)

De aquí deriva el señor Veas, como es natural, la obligación de indemnizar. Luego agrega:

En todo caso de accidente, y para los efectos civiles que pudieren suscitarse, corresponderá al patrón probar su inculpabilidad si alegara a su favor la imprudencia o mala fe del obrero para lesionarse.¹⁸

¹⁷ *Sesiones (extraordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1904-1905), sesión Nº 2, p. 41.

¹⁸ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1907), sesión Nº 41, p. 1.128.

La problemática del caso fortuito y de la fuerza mayor no tiene relevancia alguna para la moción del señor Veas, quien limita la inculpa-bilidad del patrón sólo al dolo o a la culpa del obrero.

En la reseña de la historia de la ley hemos hecho mención de un contraproyecto presentado por don Alejo Lira. En verdad, respecto de la materia que estamos analizando, constituye un verdadero contraproyecto. Todos los que hemos mencionado hasta ahora reconocen, cual más cual menos, excepciones a la obligación patronal de indemnizar. Para unos girará en torno a la fuerza mayor, para otros en torno al dolo o culpa del obrero. El contraproyecto del señor Lira difiere de todos ellos, porque propicia responsabilizar al patrón, aun cuando haya culpa por parte del obrero. Su principal defensa en la ardua discusión que su proposición originó en la Cámara¹⁹ la hizo apoyándose en legislación extranjera, principalmente francesa, española y belga.

Dando un paso más adelante -ahora sin apoyo legislativo alguno- el señor Lira propició extender la responsabilidad patronal, incluso a los casos de dolo del obrero.²⁰

La larga controversia suscitada en este punto se resolvió finalmente en la Cámara de Diputados con la responsabilización de todo accidente del trabajo, salvo el que se debiera al dolo del obrero ("intencionalmente"), o a un delito imputable a la víctima o a un extraño.²¹

El Senado, en cambio, opinó que aquí se "había ido demasiado lejos", proponiendo que se incluyera también la negligencia del obrero (culpa grave) o de un tercero.

Aun cuando algunos senadores -como el señor Guarello- opinaron que semejante extensión de la irresponsabilidad del patrón equivalía a hacer ilusorio todo el propósito de la ley, el Senado modificó la proposición de la Cámara,²² en el sentido antes señalado.

Hemos creído oportuno seguir en forma más detenida el curso de este problema, debido a que es, a juicio del tiempo y de la atención que le dedicaron los propios parlamentarios, el punto central de la ley de accidentes del trabajo.

¹⁹ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1912), sesión N° 53, p. 1.628.

²⁰ *Ibídem.*

²¹ *Ibídem.*

²² *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Senado)*, (1915).

El resto es asunto de orden más bien técnico. El otro punto, tal vez de interés doctrinario, y que pasamos a enfocar muy someramente a continuación, es el de la garantía del cumplimiento de su obligación por parte del patrón.

- b) Garantía del cumplimiento por parte del patrón de su obligación de indemnizar de acuerdo a la ley

Plantear el problema enunciado significa entrar de lleno al tema del seguro obligatorio, como el medio más corriente y eficaz de conseguir la garantía mencionada.

Elásticamente, podría entenderse como garantía cualquier sistema legal que tendiera a asegurar, aunque fuera por medios represivos, el cumplimiento de la obligación patronal de indemnizar. Pero en la práctica, fuera del medio preventivo del seguro, no existe otra garantía plena.

El legislador no estimó prudente aplicarlo por entonces, en las condiciones nacionales de la época.

En su informe de 1912, la Comisión de Legislación Social de la Cámara de Diputados señalaba lo siguiente:

Las legislaciones más avanzadas imponen al patrón y al obrero la obligación de asegurar los riesgos del trabajo, y el Estado, como ya lo hemos dicho, contribuye en algunos países a incrementar el fondo de indemnización.

El sistema de seguro obligatorio es, para algunos, el ideal que debe perseguirse (...) Pero sólo puede aplicarse en aquellas naciones donde el desarrollo de la civilización ha organizado la clase obrera en condiciones estables y serias, y donde tiende a normalizarse la organización industrial.

La experiencia irá indicando más tarde la forma en que corresponde al legislador intervenir en esta materia; adoptar desde luego alguno de los sistemas vigentes en otros países nos llevaría a lo desconocido y exponería a la ley a un fracaso de consecuencias tal vez irreparables.²³

²³ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1912), sesión Nº 36, p. 1.121.

La claridad de exposición del texto expuesto ahorra cualquier aclaración. Cabe, sin embargo, un pequeño comentario respecto de la parte final de la cita anterior.

A lo largo de todo el debate, y respecto de una serie de disposiciones, se manifiesta una posición de hondo realismo. Nada más alejado del ánimo del legislador que el dogmatismo abstracto y ajeno a la realidad histórica del momento; nada más ajeno a él que la utopía.

Sea en lo que dice relación con el momento histórico, sea en lo que dice relación con las condiciones económicas del país, observamos siempre el mismo realismo.

Tratándose del monto de las indemnizaciones, don Alfredo Barros propició que él fuera moderado, porque ello "era necesario para que se cumpliera la ley".²⁴

Sobre el campo de aplicación de la ley, la misma Comisión de Legislación Social de la Cámara de Diputados fundamentaba su restricción a la industria (y sólo a la gran industria, que es aquella que comprende más de 10 operarios), en que el desarrollo de la agricultura chilena, a la época, hacía casi inexistentes los accidentes del trabajo.²⁵

La no creación del seguro obligatorio en forma inmediata obedece, pues, a un propósito permanente de realismo legislativo. □

²⁴ *Sesiones (extraordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1909-1910), sesión N° 1, p. 20.

²⁵ *Sesiones (ordinarias) del Congreso Nacional (Diputados)*, (1912), sesión N° 36, p. 1.121.